



## **Observatorio Colombiano de la Paz -OBCOLPAZ**

Medellín, Antioquia.

04 de enero de 2007

Señor Coronel Armando Jesús Pastor López. Comandante del Batallón de Infantería Hérores del Valle del Guamuez.

De manera atenta, en este informe las ONGs Putumayo avanza hacia la paz y la justicia, la SEE sede Colombia y el OBCOLPAZ, queremos extenderle nuestra profunda preocupación por la situación que enfrenta el departamento del Putumayo frente a las ejecuciones extrajudiciales en las que puede estar involucrados miembros del Ejército a su mando.

El OBCOLPAZ en su base de datos ha sistematizado información de un total de 50 casos, donde se presentaron 18 víctimas de ejecución extrajudicial, entre los años de 1991 al 2007, en un total de 11 de los 13 municipios del departamento del Putumayo, del total de víctimas, 29 aducen que la ejecución fue ocasionada por algún miembro de la fuerza pública, de los cuales el presunto victimario perteneció a alguna unidad del Ejército Nacional, y el resto por la Policía Nacional.

El 70% de los casos sucedieron entre los años 2004 y 2006. Eso es consistente con el patrón a nivel nacional que viene siendo denunciado por diferentes ONG, hasta con una concentración temporal mayor. En el panorama nacional, algunos observadores opinan que la influencia del comandante del Ejército, Mayor Diego



## **Observatorio Colombiano de la Paz -OBCOLPAZ**

Rivera, y su estrategia de medir el éxito por el número de bajas, fue responsable por el auge de ejecuciones y falsos positivos, cuando era comandante”.<sup>1</sup>

Durante el período de mayor frecuencia de estos homicidios, el mando estaba a cargo suyo, Coronel Armando Jesús Pastor López, su jurisdicción abarcaba el centro del departamento con el Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) y en el norte del Putumayo con el Batallón de Infantería No. 26 Amadeo Rodríguez Guevara (BIARG). Se estima que de cada 10 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Putumayo, al menos 7 fueron presuntamente perpetradas por miembros de las unidades militares a su cargo, las cuales son señaladas como presuntos responsables.

Dentro de las diferentes denuncias que han llegado a nuestras manos, y del trabajo de campo que hemos realizado, hemos encontrado hallazgos de una importancia enorme y que requieren de su intervención inmediata, del uso de su mando y control para frenar esa deleznable práctica que sucede en sus filas.

A continuación, presentamos una serie de casos sobre los que queremos llamar su atención Coronel, buscando que usted se apersona de las investigaciones e inicie los procesos penales y disciplinarios que corresponden. Reiteramos la gravedad de lo que se denuncia a continuación, y tanto nosotros como las víctimas de los hechos esperamos su seriedad sobre el presente y exigimos que nos ayude a obtener verdad, justicia y reparación por lo ocurrido.

El primer caso que queremos traer a colación es la muerte de Armando Torres el 12 de junio de 2005 en donde los familiares del señor Torres y la gente de la zona ha denunciado que militares del BIHVG detuvo a Torres acusándolo de cometer un

---

<sup>1</sup> Tomado del informe del Movimiento de Reconciliación — FOR - y la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos sobre el impacto de la asistencia militar de Estados Unidos en la conducta de unidades del Ejército Colombiano entre 2000 y 2006. Informe en el que colaboró el OBCOLPAZ tanto en su elaboración como en su presentación en la ciudad de Washington en el año 2014.



## **Observatorio Colombiano de la Paz -OBCOLPAZ**

hurto y supuestamente se lo llevó a las instalaciones del Batallón para ser procesado y tomar sus datos. Nunca se volvió a tener noticia de su paradero y desde su Batallón se niega que haya sido retenido en sus instalaciones. Sin embargo, en diciembre del año 2006 la madre de Armando Torres, luego de recorrer varios departamentos, encontró el cuerpo de su hijo en Puerto Santander, Amazonas. Se le dijo supuestamente que el cuerpo fue recogido del río Caquetá.

El segundo de los casos sobre los que queremos llamar la atención son los homicidios de Antonio Jacanamijoy, Carmen Quilcatán, Félix Niño, Hugo Sinbuya y Natalia Menchucue ocurridos el 22 de febrero de 2006. Fuentes de la comunidad y el informe de necropsia de los cuerpos plantea como viable que las cinco víctimas fueran golpeadas repetidas veces con objetos contundentes mientras estaban en vida. El caso se trata de personas engañadas con una oferta laboral que aparecieron muertas y con múltiples costillas y cráneos rotos luego de haber sido vistos con miembros de su compañía Ocaso y de que la comunidad escuchara múltiples disparos en la plantación donde fueron vistos.

En tercer lugar, el 20 de enero de 2005 miembros del BIHVG capturaron a un presunto ladrón de ganado llamado René Pérez, le ataron las manos con sogas y le propiciaron diferentes golpes y patadas mientras estaba en el piso. Gracias al actuar de la comunidad que lo conocía se evitó que miembros de su batallón se lo llevaran. Fue trasladado al hospital con 4 costillas rotas, una contusión cerebral y una rótula rota.

Similar es el caso de Lidio Martínez el 04 de julio de 2006, que fue trasladado al hospital e internado en UCI luego de recibir múltiples golpes por parte de dos soldados de la compañía Amanecer por negarse a presentar sus papeles en un retén militar.

Otro de los hechos que nos genera profunda preocupación ocurrió el 09 de agosto de 2006. Militares adscritos a su batallón detuvieron a tres sujetos que



## **Observatorio Colombiano de la Paz -OBCOLPAZ**

supuestamente portaban armas en el vehículo en el que se movilizaban. La comunidad vio cómo eran subidos a un camión con los militares y cómo los pusieron boca abajo. Conforme se pudo conocer con la labor de las ONGs acá firmantes, esas tres personas fueron posteriormente asesinadas y presentadas como bajas de combatientes de las FARC-EP. Pero, además se tuvo acceso al informe de Medicina Legal del caso, donde muestra que los cuerpos sufrieron múltiples hematomas, politraumatismo y fracturas en costillas.

Como se muestra en este informe, existen casos en los que durante el actuar de los soldados adscritos al Batallón Héroes del Valle del Guamuez, los militares han propinado golpizas a civiles, y no se puede descartar que lo mismo hubiera ocurrido ese 09 de agosto, aunque este caso tenga mayor gravedad por tratarse de homicidios. Le pedimos Coronel que tome las medidas pertinentes para esclarecer los sucesos narrados y evitar que eso siga sucediendo.

### **Un escenario montado para la impunidad**

El origen de las víctimas documentadas para este informe, fue en su totalidad habitantes de barrios populares o campesinos de zonas rurales de dos municipios del Putumayo; Villagarzón y Puerto Guzmán, las víctimas en su mayoría estaban vinculados a la economía informal y a labores agropecuarias. Lo que muestra que este tipo de hecho victimizó principalmente población joven en estado de vulnerabilidad económica, lo que hacía fácil que fueran llevados bajo el pretexto de una oferta de trabajo.

En los casos documentados es claro que las lesiones fueron ocasionadas por miembros de Ejército Nacional. La ausencia de una inspección técnica al lugar de los hechos favorecía el encubrimiento de los hechos y de los presuntos homicidios en persona protegida, al limitar las pruebas a los testimonios de los miembros de la



## **Observatorio Colombiano de la Paz -OBCOLPAZ**

unidad militar vinculada con el hecho y la posible alteración de los cadáveres al incluirles elementos que facilitaban la versión de que eran miembros de la guerrilla o de alguna estructura delincriminal.

Coronel Pastor López. Le reiteramos la relevancia de los hechos acá denunciados y de la necesidad de que sus tropas respeten los derechos humanos de la población del Putumayo y que no tienen legalmente permitido propinar golpizas a personas detenidas o retenidas bajo ningún pretexto, y mucho menos la sospecha que recae sobre las actuaciones de presuntos homicidios presentadas como bajas en combate. Esas ejecuciones extrajudiciales seguirán siendo investigadas por estas ONGs y le remitiremos pronto un informe con denuncias más detalladas y con mayor profundidad. Coronel, en sus manos está hacer un uso correcto de sus funciones constitucionales para velar por el bienestar del pueblo de Putumayo y lograr que cesen esos abusos por parte de la Fuerza Pública.

Cordialmente,

***Sandra Martínez Herrera***  
**Secretaria Ejecutiva OBCOLPAZ**



## **Observatorio Colombiano de la Paz -OBCOLPAZ**

***Josep Capdevila***  
**Director SEE - Colombia**

***María de los Ángeles López Gómez***  
**Putumayo avanza hacia la paz y la justicia**